

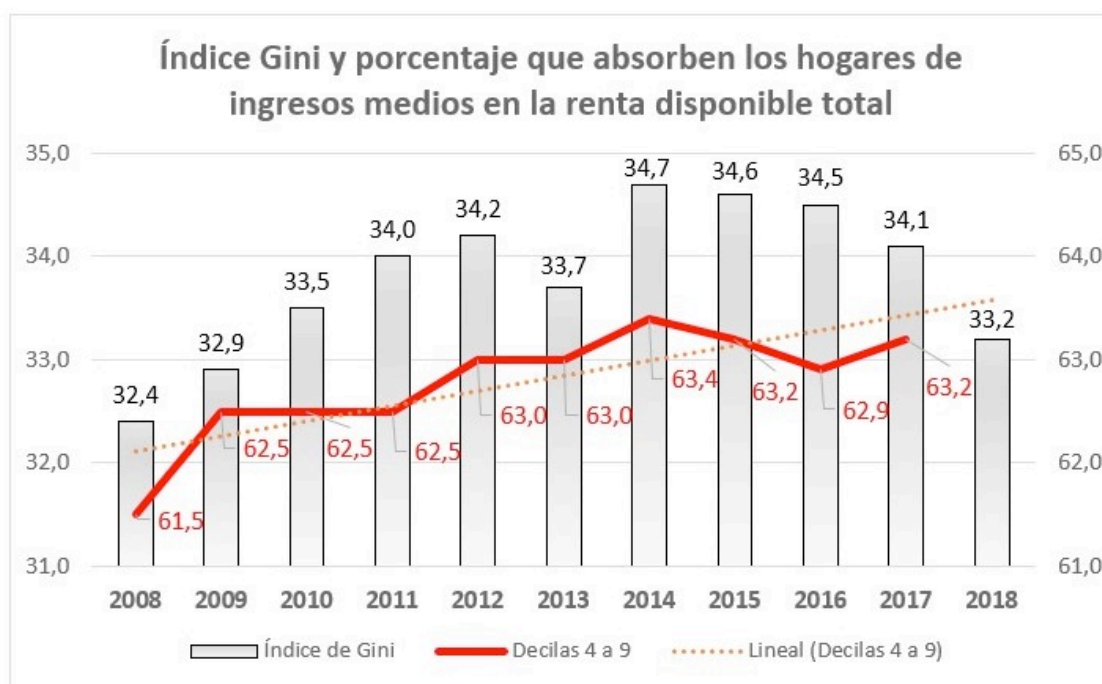
**Gabriel Flores**

## La desigualdad económica en España: manifestaciones, impactos y futuro

*Nueva Tribuna*, 29 de agosto, 5 y 11 de septiembre.

### I. Sobre las visiones simplistas o parciales de la desigualdad de rentas

Al examinar la evolución de la desigualdad de rentas en España destaca un hecho que puede parecer sorprendente, porque pocas veces se destaca: la estabilidad de la renta disponible por parte de los hogares y personas de renta media. Cerca de 28 millones de personas (un 60% de la población residente total) que ya han recuperado los ingresos de los que disponían antes de la crisis y han visto crecer su participación en la renta total, desde el 61,5% que percibían en 2008 hasta el 63,2%, en 2017 (ver gráfico del Índice de Gini).



Fuente: Elaboración propia con datos del INE, para el Coeficiente Gini (escala 0 a 100), eje de la izquierda, y del VIII Informe anual 2018 de seguimiento del indicador Arope en España, para la renta disponible de hogares de renta media, deciles 4 a 9, entre 2008 y 2017, eje de la derecha.

Se entiende aquí por rentas medias disponibles a las que perciben las personas pertenecientes a los hogares que se agrupan en los deciles 4, 5 y 6 (cada decil agrupa al 10% de la población total en función del nivel de su renta disponible): un 30% de la población residente en España o 14 millones de personas con una renta media disponible que en 2017 se situaba entre el 66,5% y el 92,2% de la media del total de personas residentes (11.074 euros anuales). Y otro 30% que se agrupa en los deciles 7, 8 y 9 con unos ingresos medio-altos que suponían en 2017 entre el 108,1% y el 158,5% de la renta media.

Por debajo de los hogares de renta media se sitúa otro 30% de la población total, los 14 millones de hogares y personas con los ingresos más bajos, pertenecientes a los deciles 1, 2 y 3 (con unas rentas medias por decil que suponen entre el 17 y el 53% de la renta media disponible total). Y por encima, el 10% de las personas con las rentas más altas (cerca de 4,7 millones de personas) que se agrupan en el decil 10, con una renta media disponible que suponía el 259% de la renta media disponible del conjunto de la población residente en España.

A nadie se le puede escapar de la observación de esos datos una consecuencia de enorme trascendencia política: la estabilidad social que proporciona un sistema o, mejor, un modelo de crecimiento y distribución de la renta que han logrado vadear la Gran Recesión sin pérdidas de renta disponible para la mayoría de la población. Lo que ha permitido preservar niveles de bienestar relativamente aceptables en gran parte de los hogares de renta media-baja y más que aceptables entre los de renta media-alta.

En el gráfico anterior aparece también la evolución del Coeficiente Gini, uno de los más utilizados como indicador de la desigualdad de rentas. En una escala de 0 a 100, el 0 supondría la máxima igualdad, todas las personas obtendrían los mismos ingresos, y el 100, el máximo nivel de desigualdad, una persona acapararía toda la renta. Se puede observar como la desigualdad crece con fuerza durante las dos fases recesivas que, entre 2008 y 2014, siguieron al estallido de la crisis global; pero también como disminuye a partir de 2014, al recuperarse un crecimiento del producto relativamente importante y muy intensivo en la creación de empleos que, pese a ser mayoritariamente precarios y mal remunerados, contribuyeron a incrementar la renta de los hogares de menores ingresos y redujeron los niveles de desigualdad.

Se trata de una evolución coherente con un modelo de crecimiento no inclusivo, sustentado en la devaluación salarial, la austeridad presupuestaria y las sucesivas reformas del mercado laboral que han impulsado una fuerte desigualdad salarial y un aumento de las rentas del capital en perjuicio de las rentas del trabajo. Paradójicamente, es ese mismo modelo de crecimiento que exige polarización salarial y altas tasas de desempleo estructural el que facilita en las fases de reactivación económica un amplio margen a la disminución de la desigualdad de rentas, por la vía de la creación de nuevos empleos precarios, a tiempo parcial y mal pagados. El seguimiento de los vaivenes de la desigualdad de la renta durante la última década también permite comprobar que ese amplio sector que hemos calificado de rentas medias apenas se ve influido por la polarización de los ingresos y mantiene su peso porcentual, con una ligera tendencia al alza, en la renta disponible total.

¿Significa esa estabilidad en el porcentaje de la renta disponible de la mayoría de las personas residentes en España una enmienda a la totalidad de los múltiples informes y análisis que hacen hincapié en los altos niveles y el aumento de la desigualdad de rentas? Ni mucho menos, se trata de la misma realidad. Pero también se trata de mostrar y percibir esa realidad en su complejidad, sin centrarse exclusivamente en una parte de los datos ni, por esa vía, deslizarse hacia conclusiones políticas o teóricas excesivamente simplistas, a fuerza de querer resaltar la indudable mala situación económica de una parte muy importante de la sociedad y los impactos tan negativos que ocasionan para millones de personas trabajadoras la lógica de acumulación del capital y, más en concreto, un modelo de crecimiento económico no inclusivo que polariza rentas y, aún más, la riqueza o el patrimonio. Pero de esa polarización no se puede inferir, en función de los datos que conocemos de la distribución de la renta disponible, que la desigualdad afecta al conjunto de la ciudadanía ni el hipotético final de las clases medias, tesis que deben contar con otros anclajes argumentales y otros datos para

sostenerse; más allá de ser consideradas como hipótesis más o menos interesantes, junto a otras muchas.

Aunque, efectivamente, ese rasgo de la estabilidad de la renta disponible por parte de la mayoría de la población es más que notable, hay que hacer notar que se complementa con otra importante característica: las rentas más bajas (los deciles 1, 2 y 3 o lo que es lo mismo el 30% de la población con menores ingresos, aproximadamente 14 millones de personas) pierden rentas, capacidad de compra, derechos y futuro desde hace una década. Lo que permite señalar y medir un intenso proceso de empobrecimiento, precariedad y aumento de los riesgos de exclusión social que desbaratan la cohesión social, tensan las relaciones socio-políticas y ponen en evidencia las lacras de un sistema que no es capaz de ofrecer empleos decentes a una parte importante de la población en edad de trabajar (lo que se traduce en altas tasas de desempleo y precariedad, bajas tasas de actividad y un elevado paro estructural) y que desplaza sobre la parte más débil de las clases trabajadoras y populares los riesgos de pérdida de empleos, salarios y derechos laborales durante las fases recesivas del ciclo, mientras en las etapas de crecimiento genera un empleo mayoritariamente indecente, temporal, muy precario y mal remunerado.

En el otro extremo, en el decil 10 que agrupa a casi 4,7 millones de personas con los mayores niveles de renta disponible y que concentra la mayor parte de las rentas del capital en ascenso y de la riqueza o el patrimonio del país, siguen mejorando su situación económica, sin que los riesgos y amenazas de recesiones y crisis les afecte o logren menguar sus rentas y patrimonios, mientras que en los años de expansión económica acaparan buena parte del suplemento de rentas que genera el crecimiento económico. Ese decil de mayor renta absorbió durante la última década un importante porcentaje medio anual de alrededor del 26% de la renta disponible total. Porcentaje que supone más del doble del total que perciben conjuntamente los deciles 1, 2 y 3 de menor renta, que son, en lo que se refiere exclusivamente a la evolución de su renta disponible, los auténticos y exclusivos perdedores de la crisis.

Conviene advertir algo obvio: ninguno de esos tres grandes espacios en los que se ha clasificado a la población, rentas bajas, medias y altas, es homogéneo; en cada uno de ellos hay importantes diferencias en los niveles de renta disponible y en las ganancias o pérdidas de renta sufridas. Naturalmente, la polarización se incrementaría mucho si en lugar de utilizar deciles, consideráramos la distribución de la renta media disponible por percentiles (un 1% de los hogares), lo que nos daría una nueva imagen de los mayores ganadores de la crisis global, en torno al 4% de la población que ha mejorado de forma ostensible su posición económica, frente a un porcentaje de alrededor del 15% en el que se encuentran las verdaderas víctimas de la crisis, ya que concentra la mayor parte de las situaciones de pobreza relativa y exclusión social que se consolidan y extienden a trabajadores y trabajadoras con empleo, aunque derivan fundamentalmente del desempleo, el empleo sumergido, los empleos temporales y precarios o los bajos niveles de estudios y cualificación laboral.

Ni la estabilidad de las rentas medias ni el alto nivel de desigualdad existente en España, respecto a las existentes en los países de nuestro entorno, son fenómenos nuevos: las sucesivas crisis, recesiones y reconversiones sectoriales que se produjeron en los 35 años anteriores al estallido de la Gran Recesión de 2008 no lograron deteriorar la parte de la renta disponible que percibían los hogares de renta media que, por el contrario, aumentaron paulatinamente su participación en la renta disponible total; al igual que las rentas más bajas (ver cuadro de Índice de Gini).

<b>Índice Gini y distribución de la renta disponible (en % del total) entre distintos grupos sociales por niveles de renta disponible</b>				
<b>Deciles</b>	<b>1973/1974</b>	<b>1980/1981</b>	<b>1990/1991</b>	<b>2007</b>
1 a 3: rentas bajas	12,7	13,0	14,2	14,9
4 a 9: rentas medias	61,0	61,6	61,9	63,1
10: rentas altas	26,3	25,4	23,9	22,0
Índice GINI	33,7	33,0	30,5	30,3

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas de Presupuestos Familiares

Ese crecimiento de las rentas bajas y medias, lejos de ser sorprendente, tiene una fácil explicación sustentada al menos en tres factores: primero, los muy bajos niveles de partida del PIB y la renta disponible por habitante en la dictadura franquista; segundo, el impulso al crecimiento inducido por la integración en la economía europea (no exenta de capacidad destructiva del tejido productivo existente), tanto antes como después de la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986; y tercero, la construcción de un Estado de Bienestar (aunque nunca llegó a tener el peso que aún mantiene en los países capitalistas más desarrollados de la UE) que aumentó significativamente las transferencias públicas de renta y realizó cambios en el sistema tributario que incorporó rasgos de progresividad fiscal y un aumento de la presión fiscal que permitió financiar el aumento de las transferencias públicas. Lo que permitió, pese al creciente avance y hegemonía de las ideas y políticas neoliberales a partir de los años 80, que los hogares de renta media y baja aumentaran significativamente su renta disponible (y su participación en la renta disponible total), al mismo tiempo que las perdían los del decil 10, con los niveles más altos de renta. Y, de este modo, se reducía también la desigualdad de rentas que mide el Índice Gini.

En resumen, a partir de 2008, cuando estalla en España la crisis financiera global, la evolución de la desigualdad de la renta presenta dos rasgos contradictorios, el primero señala una gran estabilidad de los ingresos percibidos por los hogares de renta media, mientras el segundo indica una polarización extrema entre los hogares con las rentas más altas y las más bajas. De este modo, la lucha por cambiar la distribución de la renta es protagonizada casi en exclusiva por un 40% de la población: de un lado, cerca de 14 millones de personas con las rentas más bajas, entre las que se concentran la pobreza relativa y los riesgos de exclusión social, que han sufrido mermas significativas en sus ingresos, tanto en términos absolutos como relativos; del otro, casi 4,7 millones de personas (agrupadas en el decil con las rentas disponibles más altas) que han sido los principales beneficiados de la crisis y de las políticas de austeridad y devaluación salarial y que concentran los aumentos de ingresos y tasas de participación en el total de la renta.

Frente a la imagen simplona del “Somos el 99%”, aparece otra imagen, también simplista pero más ajustada a la realidad de una sociedad heterogénea: un 60% de la población que ha sido capaz de proteger sus niveles de ingresos de las recesiones y que, tras haber sido rozadas por las políticas de devaluación salarial, han recuperado sus niveles de renta disponible de antes de la crisis; mientras un 30% ha sufrido sus impactos más negativos y un 10% se ha beneficiado a costa de las rentas más bajas.

Partidos políticos, movimientos sociales o individuos obtendrán sus propias conclusiones políticas del análisis de estas tendencias y definirán las reformas o revoluciones que proponen para cambiarlas. Existe una dura pugna por la distribución y redistribución de la renta. Y cada quien sabrá de qué lado se coloca, en defensa de qué sectores y clases sociales y qué estrategia considera conveniente para contribuir a construir una mayoría social y electoral que permita gestionar y dar respuesta, desde las instituciones y desde la organización y la movilización social, a la convivencia de una sociedad heterogénea y a las necesidades y los deseos particulares de los sectores sociales a los que se pretende representar, pero convendría que sustentaran sus conclusiones y propuestas en una mirada realista sobre una estructura social asentada y compleja y sobre los contradictorios intereses, visiones y necesidades en liza.

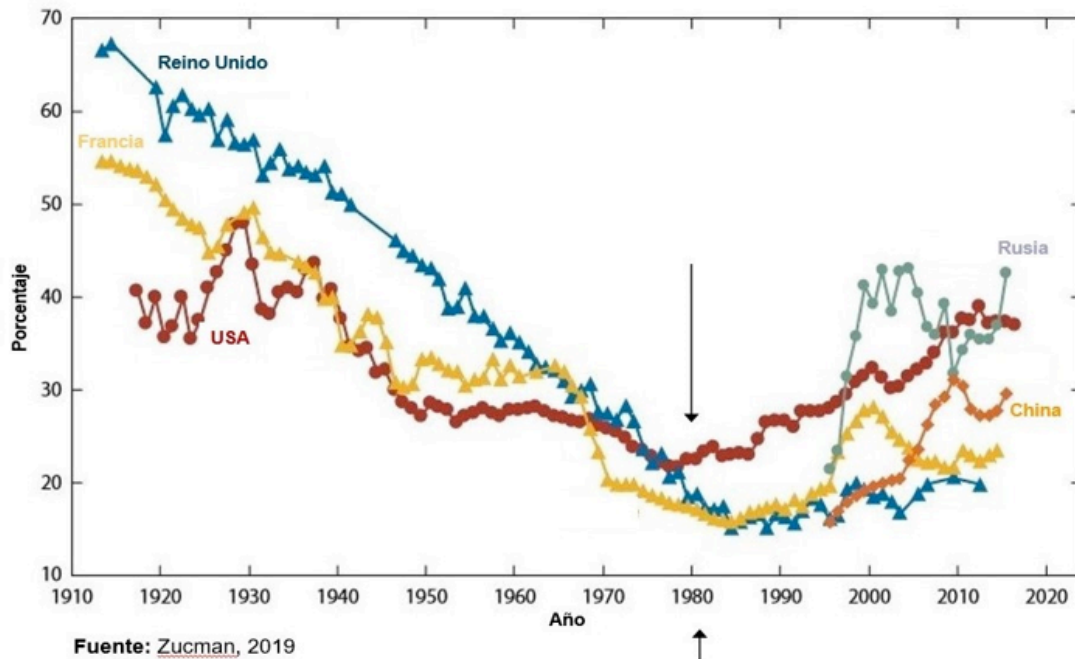
En un próximo apartado me centraré en la observación de los nuevos escenarios en los que se produce la pugna por la distribución y la redistribución de la renta, uno de los componentes importantes de lo que los viejos del lugar denominamos también lucha de clases.

## **II. Desigualdad y nuevos escenarios de la lucha de clases**

La distribución de la renta disponible a la que nos hemos referido en el apartado anterior no es la única ni la principal expresión de la desigualdad, hay otras manifestaciones, tanto o más importantes, de una intensa pugna sociopolítica que no se limita a los estrechos márgenes de las diferencias de ingresos.

El aumento de la desigualdad de rentas en la última década se da en el marco histórico de una lucha de largo aliento, que comienza con la revolución neoliberal de los años 80 del pasado siglo XX, en la que los más ricos intentan recuperar parte de los porcentajes de la riqueza (expresión contable de los activos o capitales netos, no de las rentas) que acaparaban antes de la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras. Se trata de una disputa prolongada, aún inacabada, en la que las clases dominantes están consiguiendo apoderarse de una parte creciente de la riqueza a costa de las grandes mayorías sociales. Esa pugna se agudizó a partir del estallido de la crisis global de 2008 y se extendió a la distribución de la renta y a otros muchos aspectos de una crisis socioeconómica y de representación política en la que desaparecidos actores del método, Reagan o Thatcher, han sido reemplazados por dos histriones, Trump y Johnson, y un tropel de líderes ultras que defienden la intensificación de esa guerra por otros métodos y han sustituido la ideología reaccionaria neoliberal por un batiburrillo neosoberanista reaccionario (ver gráfico de la riqueza nacional acaparada por el 1% más rico de la población en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia).

## Porcentaje de la riqueza nacional acaparada por el 1% más rico de la población



En el gráfico anterior ([Zucman, 2019](#)) se puede observar con nitidez el punto de inflexión que se produce en los primeros años 80 del siglo XX, tras una larga carrera descendente de medio siglo de la parte de la riqueza nacional que acaparan los más ricos (el 10% de la población), que disminuye desde alrededor del 50% en 1930 hasta poco más del 20% en 1980, momento a partir del cual comienza una nueva ofensiva de los más ricos para recuperar la riqueza perdida. Se trata de un fenómeno global que afecta a los grandes países capitalistas (USA, Reino Unido o Francia) y que acaba alcanzando, a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, a Rusia, el principal heredero de los desaparecidos sistemas de tipo soviético en Europa, y a China, por una vía específica o nacional de convivencia entre su viejo modelo de socialismo real y su nuevo modelo capitalista emergente. Actualmente, el 10% de los más ricos en Rusia acaparan un mayor porcentaje de la riqueza nacional que el decil más rico de EEUU. Y lo mismo pasa con los más ricos en China, respecto a los de Francia o Reino Unido.

Aclaremos, para eliminar obstáculos innecesarios que pueden entorpecer el examen de los hechos, que el concepto de lucha de clases que utilizamos en este análisis es de carácter instrumental, con unas connotaciones o cargas ideológicas más bien livianas y una vinculación débil con las categorías marxistas y los artefactos teóricos de análisis del modo de producción capitalista excesivamente pesados surgidos a mediados del siglo XIX. La utilización del concepto de lucha de clases sólo sirve aquí para expresar los diferentes conflictos socioeconómicos entre los diferentes sectores o clases sociales existentes en España. Parece conveniente remarcar también, aunque sea obvio, que se intenta describir la desigualdad y el conflicto social en la España actual, es decir, en la compleja sociedad existente en un país capitalista integrado en la UE y la eurozona, con una renta relativamente alta, a pesar de las grandes bolsas de pobreza y exclusión social, un régimen democrático asentado, a pesar de las dudas y la erosión que suponen la corrupción política y la aguda crisis territorial y de representación política que se observa desde 2014, y un Estado de Bienestar relativamente desarrollado, aunque

insuficiente en relación a los retos económicos pendientes y a las necesidades de los sectores en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, que ofrece una menor oferta de bienes públicos y protección social que la de buena parte de los países de nuestro entorno europeo.

A partir del estallido de la crisis global en 2008, además de la disputa en torno a la distribución de la renta y la riqueza nacional, destacan dos frentes importantes de la lucha de clases en los que se dirimen la extensión y el peso de los bienes públicos y el volumen de las transferencias públicas.

En el primero de estos frentes, en el que están en juego los bienes públicos, se inició una lucha defensiva prolongada poco después de la aceptación en 2010 por parte del Gobierno Zapatero de la estrategia de austeridad impuesta por las instituciones comunitarias. Se produjo, a partir de entonces, una intensa movilización social en defensa del mantenimiento de los bienes públicos (especialmente, en sanidad y educación), que se intensificó con la vuelta del PP al gobierno, en diciembre de 2011, y sus intentos de dar nuevas vueltas de tuerca a los recortes.

La crisis global que estalla en la economía española en 2008 había reducido sustancialmente los ingresos fiscales y, según los dictados marcados por la ideología económica dominante y las instituciones europeas, era imprescindible recortar el gasto público para conseguir una rápida consolidación fiscal. Lejos de conseguirla en los plazos y ritmos convenidos, los déficits fiscales fueron limados muy lentamente y las políticas de devaluación salarial y austeridad ocasionaron una segunda recesión entre 2011 y 2013. Además, las reformas fiscales regresivas aprobadas consiguieron reducir los costes fiscales de las empresas y de los sectores sociales con mayores niveles de renta y riqueza, logrando así aumentar la rentabilidad empresarial, a costa de reducir los ingresos fiscales y provocar cambios en la carga fiscal que favorecían a las rentas del capital y a los grandes patrimonios y perjudicaban gravemente a las rentas del trabajo. Especialmente, a los salarios más bajos, que se multiplicaron y se erosionaron por la doble vía de incrementar las tasas impositivas del IVA y los impuestos especiales al consumo del alcohol, el tabaco o los hidrocarburos y aprobar nuevas formas de recaudación a través del incremento de las tasas de matriculación en las etapas educativas no obligatorias (a partir de la ESO), los copagos o repagos de los medicamentos y los precios intervenidos de diferentes servicios públicos. Por otra parte, la pérdida de ingresos tributarios vinculada a la segunda recesión y a la nueva pérdida de empleos, salarios y actividad económica impedía financiar el nivel previo de bienes públicos, convirtiendo su deterioro en la coartada perfecta para hacerlos pasto de unos intereses privados que, para ser beneficiados por la subcontratación, los conciertos o la privatización de los segmentos que acreditaban una demanda potencial con capacidad de pago, no dudaban en premiar a la maquinaria política y a los políticos que les cedían tan suculento negocio.

La corrupción aceitó y excitó la imaginación de políticos corrompibles, entusiasmados con una ideología ultraliberal que consideraba dañinos y antieconómicos los bienes públicos y la presión fiscal que hacía factibles esos bienes públicos y la igualdad de oportunidades y la protección social que suponen. El ataque a los bienes públicos por parte de las derechas y los ideólogos neoliberales se extendía a cualquier actuación o intervención económica del Estado que no fueran la desregulación del mercado laboral, reformas contra la progresividad fiscal o salvar bancos y ayudar a empresas y sectores en bancarrota.

En el segundo frente se produce una lucha defensiva por parte de los sectores directamente amenazados por los recortes de las transferencias públicas de renta que estuvieron acompañados por una mayoría social progresista en la tarea de intentar mantener las más importantes manifestaciones de solidaridad organizada, especialmente la capacidad adquisitiva de las pensiones, pero también los subsidios de desempleo, las rentas mínimas a los hogares y personas en riesgo de pobreza o las rentas destinadas a que las personas dependientes pudieran ser partícipes del Estado de bienestar. Transferencias públicas que estaban amenazadas por las políticas de austeridad y por una creciente competencia fiscal entre los Estados miembros de la eurozona que se concretó en una presión permanente para reducir la carga fiscal de las grandes empresas y las rentas del capital que redujo los ingresos tributarios y las capacidades de financiación pública de las transferencias de renta.

Más de una cuarta parte de la población, alrededor de 13 millones de personas se benefician en España de esas transferencias públicas que permiten reducir de forma significativa la desigualdad primaria de rentas, antes de las transferencias públicas, que genera el mercado. De este modo, esas desigualdades primarias que en España se asocian a las altas tasas de desempleo y las bajas tasas de actividad y empleo, las reducidas competencias de parte de la población activa y la menor calidad del sistema educativo que la de nuestros principales socios y competidores, son corregidas por políticas redistributivas de gran tamaño que permiten reducir significativamente las desigualdades de renta disponible.

Así, según datos de la OCDE, aunque las desigualdades de renta en 2016 medidas por el Índice Gini de mercado (antes de las transferencias públicas) eran similares (escala 0 a 100) en EEUU (50,7), Reino Unido (50,6) y Zona Euro (50,3), tras las transferencias públicas se reducían de forma notable, aunque con una intensidad muy diferente según el peso de esas transferencias y, por tanto, de la mayor o menor presión fiscal para financiarlas: el Índice Gini tras las transferencias públicas se reducía a 30,4 en la Zona Euro, mientras RU (39,1) o EEUU (48,8) mantenían niveles de desigualdad de la renta disponible mucho más elevados. Y algo parecido ocurría en el interior de la eurozona, con niveles de desigualdad, antes de las transferencias públicas, muy altos y parecidos en Alemania (50,4), Francia (51,6), España (51,6) o Italia (51,7), pero el importante volumen de las transferencias públicas hacía que las desigualdades disminuyeran en todos los casos, aunque de forma muy desigual, en función de los diferentes niveles de las transferencias públicas: en España, el Índice Gini de la renta disponible caía hasta el 34,1 y expresaba mayores niveles de desigualdad que en Italia (32,8), Alemania (29,3) o Francia (29,1).

La conclusión es tan sencilla como contundente, la intensidad de la desigualdad está íntimamente vinculada a los bienes públicos y al volumen de las transferencias públicas existentes y, por tanto, a los niveles de presión fiscal que permiten su financiación. Ambos, bienes públicos y transferencias del Estado, constituyen los grandes pilares de la solidaridad, la cohesión social, la estabilidad sociopolítica y la igualdad de oportunidades. Sin ellos, las identidades patrióticas y la adhesión de la población a esas identidades se quedan en fórmulas vacías de contenido o en señuelos que tratan de asegurar una unión nacional sustentada en el aire de los símbolos patrióticos. De los datos anteriores, cabe extraer otras lecciones importantes: ni todos los modelos existentes del sistema capitalista son iguales o intercambiables ni todas las sociedades tienen el mismo grado de aceptación de la desigualdad de rentas y oportunidades, por mucho que el sistema capitalista se mueva con la misma lógica de acumulación o



reproducción ampliada del capital y aliente las mismas tendencias a la concentración del capital y la polarización de rentas y riquezas.

Las dos luchas mencionadas, en torno a los bienes públicos y la redistribución de la renta que realiza el sector público a través de las transferencias, responden a los intereses de la mayoría social y a los valores de la ciudadanía progresista. Y están estrechamente vinculadas a la reafirmación de los derechos humanos, las libertades democráticas y la ampliación de derechos que hace a todos los seres humanos libres e iguales frente a los sectores reaccionarios que quieren imponer sus ideas, creencias, intolerancias e identidades excluyentes al conjunto de la sociedad.

A las manifestaciones principales de la lucha de clases en los centros de trabajo o vinculadas a la negociación colectiva o a su limitación, tanto en lo que se refiere a los tradicionales conflictos y objetivos sindicales como a los más recientes (igualdad de género, responsabilidad social y ecológica de la acción empresarial, fórmulas de participación democrática en la gestión de la empresa...) hay que sumar las disputas en torno a los bienes públicos y a la redistribución de la renta que realiza el Estado a favor de los sectores sociales más necesitados, que son precisamente los que presentan los menores niveles de organización o expresión y mediación sindical y política. Se trata de nuevos escenarios de la lucha de clases que ya no competen en exclusiva ni principalmente a los sindicatos y obligan a éstos a subrayar su vertiente y acción sociopolíticas, emprender la búsqueda de compañeros y compañeras de viaje en la mayoría social no sindicada y participar en el impulso de las alianzas entre fuerzas políticas progresistas y su cooperación con los movimientos sociales.

En el tercer y último apartado de esta serie, que estará centrado en el análisis de los diferentes escenarios y formas de lucha contra la desigualdad, me referiré a los grandes cambios o transiciones en los que está embarcada la economía mundial, en los terrenos demográfico, tecnológico y energético, que están empezando a suponer ya una nueva y enorme presión contra el nivel de vida de la mayoría social que favorece un reforzamiento de las tendencias al aumento de la desigualdad y un desafío mayor para las fuerzas progresistas y de izquierdas que intentan gestionar esos cambios e impedir que sigan su curso natural y descarguen sus costes y riesgos sobre la mayoría social.

### **III. El futuro de la desigualdad**

Las nuevas expresiones de la lucha de clases en torno a la desigualdad no se agotan en la ampliación de las diferencias salariales, la muy desigual distribución de la renta que realizan los mercados, favoreciendo a las rentas del capital frente a los salarios, o la redistribución que llevan a cabo los Estados mediante los bienes y transferencias públicos a los que me he referido en el anterior apartado.

En este apartado se examinarán, en primer lugar, dos temas claves, la regulación del mercado de trabajo y la transición energética, en los que se dirime la amplitud o intensidad de la desigualdad. Después, se describirán brevemente dos procesos, el envejecimiento de la población y el cambio tecnológico, que están llamados a jugar en los próximos años un papel determinante en la evolución de la desigualdad. Finalmente, se señalarán algunos problemas políticos en la tarea de impulsar la lucha contra la desigualdad y en defensa de la solidaridad y la cohesión económica, social y territorial.

## **La desregulación del mercado de trabajo y la transición energética**

Los procesos de desreglamentación del mercado de trabajo comienzan en los albores de la revolución neoliberal de los primeros años 80 del siglo XX, con la justificación de crear empleo gracias a la flexibilización del mercado laboral. Y se intensifica a partir de la crisis global de 2008 para sustentar la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación salarial, que aún está por consumir según los valedores de una desregulación permanente que denominan reforma estructural.

Por todas partes, en todos los países, se reducen las garantías legales al despido y se abaratan las indemnizaciones por despido improcedente; aumentan las modalidades de contratación y, con ellas, la desigualdad de condiciones de trabajo y derechos entre los trabajadores de diferentes sectores o, incluso, de la misma plantilla. El mercado laboral se polariza, tanto en lo que respecta a los salarios como a la calidad y estabilidad de los empleos, debido a las grietas abiertas en la negociación colectiva y a la menor capacidad de presión y negociación de sindicatos y representantes de los trabajadores. La desregulación del mercado laboral ha provocado dos cambios de gran importancia económica y sociopolítica: primero, la patronal ha conseguido traspasar a sus plantillas la mayor parte de los riesgos y costes de las crisis, en forma de reducciones salariales y despidos, consiguiendo así que las tasas de rentabilidad del capital no se vean significativamente alteradas en las coyunturas recesivas; y segundo, una parte de las clases trabajadoras ha quedado desamparada, en situación de desempleo de larga duración o con la única opción de acceder al mercado de trabajo a través de empleos sumamente precarizados, y aislada de una mayoría que aún sigue conectada con actividades manufactureras, servicios a las empresas abiertos a los mercados globales y empleos que requieren niveles de formación y cualificación más elevados.

Los resultados reales de la desregulación del mercado de trabajo no se compadecen de las justificaciones empleadas para llevarla a cabo. Las tasas de empleo siguen siendo bajas y su débil aumento se ha debido en gran parte al abaratamiento de los costes laborales y al mínimo aumento de los salarios reales respecto al también pequeño avance de la productividad, cuyos frutos son acaparados por las rentas del capital y un segmento de los empleos de mayor valor añadido y con salarios más elevados. Se ha conseguido también, es cierto, una fuerte reducción de la tasa de desempleo, pero esa mejora tiene como contrapartida una proliferación de empleos precarios que, dados el desánimo creciente para conseguir un empleo decente y la enorme competencia por los empleos de mayor cualificación, han provocado la reducción de las tasas de participación, maquillando de esta forma las cifras del paro. Este es el panorama general de los países de la UE que en España se ve agravado por una consolidación de estructuras y especializaciones productivas que requieren para reproducirse de bajos salarios y empleos de baja cualificación que dependen de actividades estacionales y fuertes variaciones de la demanda. Así, la tasa de empleo (personas con empleo en porcentaje de la población en edad de trabajar) era en España, en el primer trimestre de 2019, del 62,5%, muy por debajo de la media de la eurozona (67,3%) y sólo por encima de Italia (58,8%) y Grecia (55,9%). Y la tasa de desempleo (personas que buscan trabajo respecto a la población activa) era aún peor, un 14,7% en el primer trimestre de 2019, que sólo era superada por la de Grecia (19,2%) y estaba muy próxima a doblar la media de la eurozona (8,1%).

En el otro tema clave, la transición energética, hay que tener en cuenta que las reformas imprescindibles para impulsarla acabarán produciendo un alza del precio de la energía que será difícil de encajar por los hogares y personas de menor renta. No nos referimos

a un más allá impreciso, sino al ahora mismo y a los próximos años. Esa previsión de aumento en el precio de la energía se sostiene en la inexorable reducción de las reservas y la oferta de energías fósiles y en la progresiva aplicación de nuevas cargas fiscales para reducir su consumo e incentivar la oferta de las energías renovables que exigen los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático; sin olvidar que el carácter intermitente de la producción de energías renovables (solar o eólica) requiere de capacidades de producción y almacenamiento netamente superiores a la demanda, lo que también contribuirá a encarecer su precio. Piénsese, además, que el incremento en el precio de la energía irá acompañado de la pérdida de empleos industriales en sectores tradicionales: automoción, por la transición al coche eléctrico; sector químico, por la reducción en la utilización de los plásticos; bienes de equipo, como resultado de la transformación del mundo en una economía con un peso creciente de los servicios que ocasionará un nuevo declive de los empleos y actividades industriales y su sustitución por empleos de servicios a las personas con niveles salariales más reducidos.

Hay que subrayar que los procesos de descarbonización de la economía son ineludibles, pese a las resistencias políticas y económicas que hasta ahora han dificultado y lentificado la aplicación de las medidas necesarias acordadas. Si la gestión de esos procesos se deja en manos de los poderes económicos establecidos y sus terminales políticas, serán mayores las posibilidades de que sus costes sean descargados sobre la mayoría social. Lo que implicaría un nuevo impulso al empobrecimiento de partes significativas de la sociedad, un aumento de las desigualdades de renta y crecientes tensiones sociales. Aunque se tiende a imaginar y presentar la transición energética como una suma de reformas idílicas sin costes y cargadas de oportunidades con las que todo el mundo gana, es más razonable prever que haya un fuerte incremento de los costes energéticos durante un largo periodo transitorio que dará lugar a una agria disputa sobre qué sectores sociales sufrirán sus impactos. Si la mayoría social se hace consciente de su capacidad para imponer una transición energética equilibrada y justa en el reparto de los costes, serán los más ricos y a los actores económicos y sociales que se beneficien en mayor medida de la descarbonización de la economía los que tengan que financiar, a través de una reforma fiscal progresista, el necesario aumento de las transferencias públicas a los sectores sociales más perjudicados y desfavorecidos. Pero esa disputa se puede perder.

### **El envejecimiento demográfico y el cambio tecnológico**

La transición demográfica está suponiendo en los países capitalistas de la OCDE una rápida caída de la población en edad de trabajar respecto a la población total, lo que supondrá un aumento del gasto social que en la UE supone ya un muy elevado 30% del PIB y no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo (la UE apenas supone un 7% de la población mundial, pero su gasto social es la mitad del gasto social mundial). El envejecimiento de la población aparece así como un nuevo factor que presiona para reducir el nivel de vida de la población. Si hoy en la eurozona, la población de más de 60 años representa la mitad de la población entre 20 y 60 años, dentro de una década se estima que el porcentaje habrá aumentado hasta cerca del 70%, lo que ocasionará un fuerte aumento del gasto sanitario y, más aún, de las pensiones, y un nuevo litigio por la redistribución de la renta entre población activa y pensionistas. El crecimiento de la productividad, muy débil hoy en el conjunto de los países capitalistas desarrollados, podría reducir el problema, pero a nadie se le escapan las dificultades por las que pasa un sector público atenazado por las políticas de austeridad y un ahorro privado que no tiene cauces ni incentivos para financiar la inversión productiva modernizadora, la investigación y el desarrollo del sector privado. Y algo similar ocurre con los

fenómenos migratorios y las restricciones políticas y sociales que existen en los países de la UE para considerarlos una posible solución, como consecuencia del ascenso de la extrema derecha xenófoba y neosoberanista y la extensión de una percepción muy ideologizada que los asocia a un grave problema o amenaza pendientes de resolver.

La transición tecnológica, por su parte, implicará una aplicación más intensiva que hasta ahora de las nuevas tecnologías (robots, paquetes informáticos más potentes y especializados, inteligencia artificial...) en los procesos de producción y distribución, lo que ocasionará la desaparición de empleos intermedios en la industria y los servicios a las empresas con salarios relativamente altos. El progreso técnico, además, favorece la ampliación de las diferencias salariales, a favor de los sectores con mayores niveles educativos y de cualificación laboral. Si no existe ningún tipo de mediación política o intervención pública en la gestión de esa transformación, para responder a los grandes cambios pendientes en la naturaleza de los empleos y las cualificaciones, se multiplicarán los empleos peor remunerados en los servicios a las personas y los de mayor valor añadido y remuneración en los servicios a las empresas que concluirán en una reducción del nivel de vida de un amplio sector social y una mayor desigualdad salarial. Hay, no obstante, una excesiva preocupación por la amenaza de la desaparición de empleos que supondrá la intensificación de los procesos de robotización y demasiado poca, por problemas reales de tanta o más relevancia que se han hecho presentes en las dos últimas décadas con la aplicación de las nuevas tecnologías, que no ha supuesto hasta ahora la temida reducción neta del empleo (por mucho que el empleo en algunos sectores haya padecido un fuerte impacto destructivo); por el contrario, nunca ha habido tantos miles de millones de población y empleos en el mundo. El impacto más importante de la aplicación del progreso técnico está siendo la sustitución de empleos de cierta calidad y con relativamente altos salarios por empleos indecentes de bajo valor añadido y mal remunerados que alientan la desigualdad salarial y una distribución de la renta que favorece a los beneficios empresariales y demás rentas del capital.

### **La lucha contra la desigualdad**

Las izquierdas y las fuerzas progresistas parecen vivir de espaldas a los cambios mundiales que ya dejaron hace años de ser riesgos y se han transformado en una robusta tendencia destructiva del tejido social, contraria a la convivencia y enemiga de la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. En España, las grandes formaciones de izquierdas llevan meses enredadas en movimientos tácticos partidistas que no conducen a ninguna parte que no sea un triunfo efímero sobre sus imprescindibles socios y que dificultan que centren su atención en el diseño y lanzamiento de un ambicioso programa integral de lucha contra la desigualdad.

La necesidad de gestionar desde las instituciones los factores de cambio que impulsan la desigualdad de renta y defender la solidaridad y la cohesión es un mandato inexcusable de la mayoría social, en el que se juega la razón de ser de la izquierda y su futuro.

La resolución de los problemas que genera la desigualdad requiere mayores afanes en la construcción de amplias alianzas de carácter transversal que sobrepasen el ámbito de los Estados y permitan utilizar los espacios e instrumentos institucionales para impulsar las reformas y los cambios legales imprescindibles. Siendo necesarias, no basta con aumentar las medidas paliativas (alza de las rentas y los salarios más bajos; extensión de las rentas mínimas y aumento de las transferencias sociales; fiscalidad progresiva y redistributiva) y la eficacia de las políticas redistributivas para aminorar las desigualdades de renta y riqueza que genera el mercado. Esas desigualdades tenderán a crecer si no existen políticas redistributivas de gran tamaño que a medida que

requirieran nuevos aumentos de la presión fiscal para financiarlas aumentarían la resistencia social y política a tales aumentos por parte de los sectores sociales con mayores recursos y capacidad para financiarlos.

Por eso, además de actuar sobre las manifestaciones de la desigualdad, hay que atacar las causas de las desigualdades primarias de renta, las que se generan en los mercados, con la asignación de precios que remuneran de forma muy desigual la participación de los factores productivos, y las que surgen de los mercados oligopólicos que capturan rentas vinculadas a la debilidad o ausencia de competencia. Causas y políticas destinadas a corregirlas que son conocidas y que se pueden resumir en la promoción de inversiones públicas y privadas que propicien la mejora de las competencias de la población activa (que ahora son insuficientes y frenan el progreso técnico y la modernización de estructuras y especializaciones productivas), una mayor calidad del sistema educativo (cuya degradación mina la igualdad de oportunidades y el aprovechamiento de los talentos) y un aumento de las tasas de empleo que se puede lograr si se transforman las necesidades de ahorro energético, la extensión de los bienes públicos y el cambio de estructuras y especializaciones productivas en oportunidades para impulsar nuevas actividades económicas y el empleo.

No hay ninguna fórmula mágica o realista que por sí sola sea capaz de desatar o cortar el nudo gordiano de la desigualdad de rentas, por muy brillantes y sugerentes que sean sus denominaciones: austeridad, soberanía nacional, desglobalización, revolución científica técnica, renta universal, decrecimiento u otras. En la lucha contra la desigualdad valen de poco los aspavientos y puñetazos en la mesa y no es bastante el aumento de las políticas redistributivas del Estado.

En la lucha contra la desigualdad, la acción política e institucional es clave. Tanto para lograr la participación de la ciudadanía en el cambio de las pautas de consumo y en defensa de los valores de la solidaridad y la cohesión social como para desarrollar una cooperación estratégica entre las fuerzas progresistas en las instituciones de ámbito estatal y europeo que permitan ampliar los márgenes y posibilidades de ensayo y la aplicación de las reformas destinadas a paliar las consecuencias de la desigualdad, mejorar a corto plazo la situación de los sectores más desfavorecidos y actuar a largo plazo sobre sus múltiples causas y las viejas y nuevas fuerzas globales que la impulsan.